

MOCIÓN POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS EN MATERIA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN DE CONSUMOS.

El mercado de la electricidad en Chile se divide en tres grandes segmentos: generación, transmisión y distribución. En los tres, la participación privada cumple un rol clave en los tres segmentos, pero sólo a través de la regulación, supervisión, fiscalización y dirección pública se pueden alcanzar los objetivos nacionales asociados a una fuente de energía que es vital para el desarrollo de Chile y proteger, al mismo tiempo, los derechos de las personas que requieren de la electricidad para llevar cabo su vida diaria.

En este último aspecto, la regulación legal eléctrica es particularmente anémica en cuanto a la protección de los consumidores finales, quedando gran parte de la normativa a nivel reglamentario o, incluso, relegada a instrucciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Este es el caso de la regulación sobre el mecanismo de lectura de medidores que sirve de base a las boletas o facturas que se emiten a los usuarios finales por su consumo eléctrico. El régimen de medición y facturación se encuentra desarrollado en el Capítulo 4, del Título III, del Decreto N° 327, de 1997, del Ministerio de Minería, que fija Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos. Aunque el reglamento establece que los usuarios deben dar facilidades para que los concesionarios puedan tomar lectura de medidores, también contempla que, en caso que esto no sea posible en virtud de una causa no imputable al concesionario, debe cobrar por ese mes un promedio del consumo de los últimos seis meses y ese monto servirá de abono para cuando el cobro se efectúe en base a la lectura efectiva del medidor.

Aunque el mecanismo descrito en el párrafo anterior parece simple, ya en el año 2005 el Superintendente de Electricidad y Combustibles de la época señalaba que “en ocasiones, las empresas concesionarias han facturado consumos cero por periodos largamente superiores al que la normativa permite y autoriza, con el consiguiente perjuicio que conlleva esta acción para los clientes, por la acumulación de los consumos que perdura hasta que la empresa obtiene la lectura real del medidor, resultando en la mayoría de los casos importes cuantiosos que dificultan el pago de la deuda” (Oficio Circular N° 1994, de 11 de abril de 2005) y reconocía que la normativa reglamentaria resultaba insuficiente, motivo por el cual dictó instrucciones adicionales vigentes hasta el día de hoy.

Sin embargo, la normativa reglamentaria e infra reglamentaria no se puede hacer cargo de deficiencias regulatorias que han venido a resultar evidentes dado el comportamiento de CGE en relación con los clientes de la Región del Maule durante el presente año. Tal como la misma empresa señaló en un comunicado del mes de Agosto del presente, dado que había terminado anticipadamente el contrato que tenía con otra empresa para efectuar las lecturas de medidores, había procedido a cobrar durante el mes de julio en base a las estimaciones que permiten el artículo 129 del reglamento ya individualizado y, en Agosto, estaba realizando los cobros por las diferencias en la medición efectiva.

Este comunicado revela tres cosas. En primer lugar, que una función esencial de giro de la empresa de distribución como es la lectura de medidores se encuentra tercerizada; en

segundo lugar, que la empresa concesionaria considera que su decisión económica de tercerizar esta función -incorporada a su modelo de negocio-, así como de dar por terminado el contrato con el tercero por incumplimientos de este, le permite afirmar que la imposibilidad de tomar lecturas no le es imputable, lo que resulta al menos discutible y le corresponde a la Superintendencia respectiva fiscalizar; y, tercero, que, tal como en el 2005, seguimos teniendo el problema que la gente, por un hecho en el cual no tienen ninguna injerencia, deben pagar de un mes a otro diferencias de consumo que, en muchos casos, arruinan su presupuesto mensual.

Por tanto, vengo a proponer el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único. Agrégase, a continuación del punto aparte del artículo 139 bis del decreto con fuerza de ley N° 4/20018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos, que pasa a ser seguido, los siguientes incisos segundo y tercero nuevos del siguiente tenor:

“La revisión del consumo eléctrico de los usuarios finales deberá realizarse por trabajadores de la empresa distribuidora debidamente identificados. En caso que esta revisión no pueda realizarse por motivos no imputables a la empresa distribuidora, lo que deberá informarse al usuario final dentro de los cinco días de producido el impedimento, la empresa distribuidora deberá cobrar por el respectivo período de facturación el monto equivalente al promedio de consumo de los últimos seis períodos y este monto se abonará al pago que corresponda realizar el usuario final de acuerdo a la siguiente boleta o factura que se emita en base a la lectura efectiva del medidor.

Si de la imputación de los abonos al cobro de lo efectivamente consumido durante el período en que se utilizó el mecanismo establecido en el inciso precedente resultare un saldo a favor de la empresa distribuidora, este deberá cobrarse en seis cuotas mensuales iguales y no procederá la suspensión del suministro por las cuotas impagas sino una vez transcurridos 45 días desde el vencimiento de la boleta o factura que contenga la última cuota.”

PAULINA VODANOVIC ROJAS

SENADORA

INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE AMPLÍA LA COBERTURA DEL SUBSIDIO ELÉCTRICO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY N° 21.667 E INTRODUCE OTRAS MEDIDAS DE PERFECCIONAMIENTO A LA LEY N° 18.410 QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES. BOLETÍN N° 17.064-08.

Para agregar, a continuación del numeral 2 del artículo 2, un numeral 3 nuevo, pasando los siguientes numerales a ser los numerales 4, 5, 6 y así sucesivamente, del siguiente tenor:

«3) Agrégase, a continuación del punto aparte del artículo 139 bis, que pasa a ser seguido, los siguientes incisos segundo y tercero nuevos del siguiente tenor:

“La revisión del consumo eléctrico de los usuarios finales deberá realizarse por trabajadores de la empresa distribuidora debidamente identificados. En caso que esta revisión no pueda realizarse por motivos no imputables a la empresa distribuidora, lo que deberá informarse al usuario final dentro de los cinco días de producido el impedimento, la empresa distribuidora deberá cobrar por el respectivo período de facturación el monto equivalente al promedio de consumo de los últimos seis períodos y este monto se abonará al pago que corresponda realizar el usuario final de acuerdo a la siguiente boleta o factura que se emita en base a la lectura efectiva del medidor.

Si de la imputación de los abonos al cobro de lo efectivamente consumido durante el período en que se utilizó el mecanismo establecido en el inciso precedente resultare un saldo a favor de la empresa distribuidora, este deberá cobrarse en seis cuotas mensuales iguales y no procederá la suspensión del suministro por las cuotas impagas sino una vez transcurridos 45 días desde el vencimiento de la boleta o factura que contenga la última cuota.”»

PAULINA VODANOVIC ROJAS

SENADORA

INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE CREAR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ESPECIAL EN GENDARMERÍA DE CHILE Y REGULAR DICHO RÉGIMEN PENITENCIARIO (BOLETÍN Nº 17.007 -07)

Para agregar, en el artículo 1º, a continuación del numeral 1), un numeral 2) nuevo, pasando los siguientes numerales 2) y 3) a ser numerales 3) y 4), respectivamente, del siguiente tenor:

«2) Agrégase, en el literal b) del inciso segundo del artículo 8ºA, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente:

“b) Solicitar, a través de la Jefatura de esta Subdirección, y ejecutar la autorización para utilizar los procedimientos especiales de obtención de información a que se refiere el artículo 24 de la ley Nº 19.974, en los mismos términos que se establecen en dicha ley, respecto de personas privadas de libertad sometidas a un régimen de seguridad especial. Para estos efectos, la Jefatura de esta Subdirección podrá disponer, por resolución fundada, la suspensión por un plazo determinado de la obligación establecida en el inciso segundo del artículo 304 ter del Código Penal para los funcionarios de los respectivos establecimientos y secciones penitenciarias.”»

PAULINA VODANOVIC ROJAS

SENADORA

COMPARACIÓN CUANTITATIVA DE LA REGULACIÓN DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA ESPAÑOL Y CHILENO

Considerando que en la Comisión Mixta del proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado se ha propuesto utilizar como referencia el sistema de inteligencia español.

A continuación, se realiza una identificación y cuantificación de la normativa española y su comparación con la chilena, para referencia:

Cabe señalar que se debe distinguir entre la comparación normativa de la CNI con la ANI, de la comparación entre regulación de sistemas de inteligencia.

Dada la dispersión normativa de la regulación de los órganos de inteligencia españoles y sus funciones, se hizo una revisión de las principales leyes y reales decretos que tratan la materia y la enumeración de artículos que abarcan temas que se encuentran en el proyecto de ley chileno.

NOTAS:

- 1) No se consideraron disposiciones denominadas en Chile como “transitorias”.
- 2) No se consideró la regulación de los órganos de inteligencia de la Policía Nacional, sólo de la Guardia Civil, por la similitud de sus funciones.
- 3) En los reales decretos se consideraron sólo artículos que serían de reserva legal en Chile o que requerirían una habilitación especial de la potestad reglamentaria que permita alejarse de la regla general (estatutaria o presupuestaria, por ejemplo).
- 4) No se consideró la regulación del secreto y la protección de información clasificada tratada en la ley de secretos oficiales de España.
- 5) No se consideró la regulación sobre gastos reservados, ya que tampoco es parte de la ley de inteligencia en Chile.
- 6) Cada artículo que efectúa varias modificaciones a artículos de otras leyes, se consideró numéricamente por la cantidad de artículos modificados (por ejemplo, la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, cuenta con un artículo único que regula el control judicial previo del CNI que cuenta como 1 artículo, y una “disposición adicional única” que efectúa 4 modificaciones a diferentes artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que cuentan -entonces- como 4 artículos).
- 6) El levantamiento de información se realizó a partir de la información contenida en el libro Javier Llavador Piqueras y Hilario Llavador Cisternes *“El Régimen Jurídico de los Servicios de Inteligencia en España”* (Editorial Tirant Lo Blanch, 2015) y las referencias normativas verificadas en el portal www.boe.es.

RESULTADO:

El sistema de inteligencia español cuenta con 67 artículos que tendrían rango legal en Chile, de los cuales 40 regulan el actuar de la CNI.

La ley N° 19.974 actualmente vigente, para regular todo el sistema de inteligencia, contempla 50 artículos permanentes y la Agencia Nacional de Inteligencia se encuentra en un título (III) de 12 artículos.

ORGANISMO	CUERPO NORMATIVO	CANTIDAD DE ART.
CNI	Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.	5 artículos
CNI	Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.	13 artículos
CNI	LEY ORGÁNICA 10/2007, DE 8 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA BASE DE DATOS POLICIAL SOBRE IDENTIFICADORES OBTENIDOS A PARTIR DEL ADN.	1 artículo
CNI	LEY 25/2007, DE 18 DE OCTUBRE, DE CONSERVACIÓN DE DATOS RELATIVOS A LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y A LAS REDES PÚBLICAS DE COMUNICACIONES.	1 artículo
CNI	LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	1 artículo
CNI	LEY ORGÁNICA 9/2022, DE 28 DE JULIO, POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS QUE FACILITEN EL USO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE OTRO TIPO PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN O ENJUICIAMIENTO DE INFRACCIONES PENALES, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y OTRAS DISPOSICIONES CONEXAS Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.	1 artículo
CIFAS	Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas.	1 artículo
CITCO	Real Decreto 873/2014, de 10 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.	10 artículos

Jefatura de Información. Guardia Civil.	Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.	1 artículo
SISTEMA	Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno (composición de la Comisión que sólo se enuncia en la ley del CNI)	1 artículo
CNI	Real Decreto 1310/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional y la composición y funciones de la Comisión Interministerial de Defensa (participación del CNI)	2 artículos
SISTEMA (excepto CNI)	Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.	14 artículos
CNI	Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia; consta de 108 artículos.	8 artículos (al menos)
CNI	Real Decreto 593/2002, de 28 de junio, por el que se desarrolla el régimen económico presupuestario del Centro Nacional de Inteligencia.	8 artículos

MINUTA SOBRE NUEVAS BARRERAS EN LA FRONTERA NORTE

TRÁNSITO ILEGAL DE VEHÍCULOS EN LA FRONTERA NORTE. pese a que existen denuncias públicas hechas ya por el Ministro de Relaciones Exteriores, don Heraldo Muñoz, el año 2017 por el tráfico de vehículos robados en Chile y conducidos a Bolivia y durante este gobierno se han realizado operativos conjuntos entre las policías chilenas y bolivianas, así como la firma de convenios de cooperación entre autoridades civiles de ambos países para dar con el paradero estos vehículos, no ha sido posible detener esta actividad delictual.

Ante el hecho que el Presidente del país vecino donó -sin saberlo- un auto robado en Chile a una comunidad indígena boliviana, la presidenta de la Aduana Nacional de ese país, Karina Serrudo, junto con anular la nacionalización del vehículo, señaló que "La mayor cantidad de vehículos que vienen a Bolivia son de la República de Chile y esto es porque en Chile existe este tipo de robos al interior de su país (...), estos vehículos ingresan a Bolivia y es responsabilidad de cada país cuidar sus límites y cuidar la propiedad de sus ciudadanos. Nosotros en Bolivia también cuidamos la propiedad de nuestros ciudadanos".

Crimen organizado transnacional y uso de vehículos en la frontera norte. Gran parte del tráfico de vehículos sirve al crimen organizado chileno para adquirir droga y armas, como lo demostró el resultado de la denominada "Operación Caserío" llevada a cabo en mayo de este año por la PDI. Esta operación también confirmó que el *modus operandi* de estas bandas consiste, en casi todos los casos, en trasladarse en el vehículo a través del desierto por pasos no habilitados hasta Bolivia.

La situación descrita da cuenta de una grave amenaza proveniente del crimen organizado que va en desmedro de la capacidad estatal para controlar lo que ocurre en su territorio y, además, de un nivel de permeabilidad y déficit en el control de la frontera que resulta preocupante desde el punto de vista militar y de la seguridad nacional, ya que no sólo hemos experimentado un aumento sustancial en la cantidad de personas que cruzan a pie el desierto por diversos motivos, sino que incluso cientos de vehículos no ven impedido su paso entre ambos países.

USO DE BARRERAS PARA IMPEDIR EL TRÁNSITO ILEGAL DE VEHÍCULOS. el uso de barreras para el tránsito indiscriminado de vehículos de distintos tipos por pasos no habilitados puede ser impedido de distintas maneras. Evidentemente, las opciones disuasivas presentan un nivel de efectividad a las que mero control o que se enfocan en la persecución de los delitos asociados.

Entre las tácticas militares para disuadir del uso de vehículos con el fin de proteger fronteras, se encuentran defensas pasivas y activas.

DEFENSAS PASIVAS. Las defensas pasivas consisten en estructuras metálicas o de concreto de gran tamaño que bloquean el paso de vehículos -ya sea tanques o automóviles normales- y que se ha utilizado como herramienta defensiva desde la segunda guerra mundial hasta la reciente guerra entre Rusia y Ucrania; este tipo de defensas pasivas son llamadas -en diversos idiomas- "erizo checo" y "diente de dragón".

DEFENSAS ACTIVAS. Las defensas activas más modernas, como las minas antivehículos, permiten que las minas puedan ser remotamente activadas y desactivadas, y explotan sólo si se aplica una presión superior a 300 kg., asegurando que su uso no afecte a personas que transiten a pie por dichos lugares. De igual modo, la tecnología actual permite la activación o desactivación a distancia de dichas minas, así como establecer un período de inutilización automática.

RÉGIMEN JURÍDICO DE MINAS ANTIPERSONALES Y ANTI-VEHÍCULOS. Que la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción fue adoptada en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 1997 y aprobada por el Congreso Nacional el año 2001.

El Presidente de la República promulgó dicha Convención, comúnmente conocida como “Convención de Ottawa”, mediante el Decreto N° 4, de 2002, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Convención de Ottawa obliga a los Estados Partes, según lo dispuesto en el artículo 1, a no emplear, en ninguna circunstancia, minas antipersonales, desarrollarlas, adquirirlas, conservarlas o adquirirlas, así como ayudar o inducir a otro Estado Parte a realizar estas actividades, y a destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonales en su poder y en su territorio, de conformidad a lo previsto en la misma Convención.

Mediante decreto N° 2.200/79, de 2002, del Ministerio de Defensa Nacional, se creó la Comisión Nacional de Desminado, como órgano asesor del Presidente de la República y coordinador interministerial, de las acciones tendientes a dar cumplimiento a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción.

El 27 de febrero de 2020, Chile concluyó las labores de desminado humanitario, eliminando minas antipersonales de 200 áreas, en las que fueron destruidas 179.815 minas y liberados más de 27 millones de metros cuadrados.

El artículo 2 de la Convención de Ottawa establece que se entiende como mina antipersonal “toda mina concebida para que explote por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más personas.”

El mismo artículo señalado en el numeral precedente dispone que “las minas diseñadas para detonar por la presencia, la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de una persona, que estén provistas de un dispositivo antimanipulación, no son consideradas minas antipersonales por estar así equipadas” y, por ende, su uso no está prohibido por la Convención de Ottawa (a similar conclusión se llega por [académicos](#) de West Point a raíz de la situación finlandesa).

El uso de minas antivehículos se encuentra regulado internacionalmente por las normas generales del Protocolo II, enmendado, de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, aprobado por el Congreso Nacional y promulgado en Chile mediante el Decreto N° 137, de 2004, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Que, en todo caso, el Protocolo II de la Convención precitada dispone que se deben tomar todas las precauciones viables para proteger a las

personas civiles de los efectos de cualquier tipo de minas y los numerales 10 y 11 del Protocolo II señalan entre las “precauciones viables” el uso de cercas, señales, avisos y vigilancia.

OBJETIVO MILITAR Y PROTECCIÓN DE LA FRONTERA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO. Que la convención citada en el numeral precedente prohíbe el empleo indiscriminado de minas, entendiendo por tal aquellas que no están dirigidas contra un objetivo militar o que se puedan prever que causen fortuitamente la muerte o heridas a civiles o a sus bienes y el daño sea excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. En este sentido, el crimen organizado transnacional y el descontrol de la frontera norte es un problema de la seguridad nacional que debe ser abarcado por las Fuerzas Armadas.

El reconocimiento de la amenaza que representan el crimen organizado transnacional para la defensa nacional ha sido un tránsito que nuestro país ya ha recorrido. Mientras el libro de la defensa del año 2002 establecía que la cooperación internacional era la mejor manera de hacer frente a estas “amenazas no convencionales” sin enunciarlas (p. 45), el libro de la defensa nacional de 2010 identifica derechamente a la “delincuencia organizada transnacional” como un problema para la seguridad nacional del hemisferio sur (p. 132) y valora la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz en diferentes países donde les toca reestablecer el orden y la seguridad públicas, así como el impulso del concepto de seguridad humana por sobre el de seguridad nacional y que conlleva la protección contra el crimen organizado (p. 89); las mismas reflexiones se repiten en el libro de 2017 (p. 135). Este camino llega finalmente a la Política de Defensa Nacional de Chile del año 2020 que señala claramente que “(e)l crimen organizado transnacional representa una potencial amenaza a la seguridad nacional” y que “el sector Defensa tiene una responsabilidad de colaboración, particularmente en los ámbitos de control de zonas fronterizas” (p. 43), lo que se plasmó en la reforma constitucional impulsada por este Gobierno que asimiló la frontera a la infraestructura crítica y dio un rol determinante a las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad tanto de la frontera como de esta infraestructura.